


Título: La importancia de distinguir entre dominio y jurisdicción (comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Administración de Parques Nacionales c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad")

Autor: de la Riva, Ignacio M.

País:  Argentina

Publicación: El Derecho - Revista de Derecho Administrativo, Septiembre 2024 - Número 9

Fecha: 02-10-2024 Cita Digital: ED-V-DCCCLXXXV-517

La importancia de distinguir entre dominio y jurisdicción (comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Administración de Parques Nacionales c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"(*))

Comentario al fallo *Administración de Parques Nacionales c. Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*.

por Ignacio M. de la Riva(**)

Sumario: 1. Dominio y jurisdicción como conceptos distintos: "Del dicho al hecho...". - 2. Reseña del caso. - 3. Condición jurídica de las tierras comprendidas dentro de los límites de los Parques Nacionales y las Reservas Naturales. - 4. La creación de la Provincia de Río Negro y sus efectos. - 5. Efecto jurídico de la ampliación del ejido municipal. - 6. Análisis de la decisión adoptada por la Corte Suprema.

1. Dominio y jurisdicción como conceptos distintos: "Del dicho al hecho..."

Que dominio y jurisdicción son dos nociones diferentes es algo que ha señalado la Corte de Justicia de la Nación en innumerables pronunciamientos a lo largo de los años. Como más de una vez ha observado el máximo tribunal, "dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos, pues bien puede existir uno sin la otra y viceversa"(1).

Para ilustrarlo suele acudir al caso de los ríos navegables, que pertenecen al dominio originario de las provincias que atraviesan, sin que ello sea óbice para que el gobierno federal ejerza jurisdicción exclusiva sobre ellos en materia de navegación(2). Pueden darse, sin embargo, muchos otros ejemplos. Entre ellos, el referido a los hidrocarburos, que si bien resultan, también, del dominio originario de las provincias(3), compete únicamente al Congreso de la Nación sancionar la legislación sustantiva a la cual se sujeta su explotación(4).

En el terreno teórico no hay, por tanto, debate respecto a que dominio y jurisdicción comportan categorías jurídicas diferentes. La primera de ellas, aun cuando admite muchas acepciones (dominio como derecho real, en los términos del artículo 1941 del Código Civil y Comercial de la Nación; el dominio público, previsto en el artículo 235 del mismo cuerpo; el dominio originario, contemplado en el artículo 124 de la Constitución Nacional; y otras más recogidas por las normas o por la doctrina, como el dominio eminente, el dominio fiduciario, etc.), entraña un título que dota a quien lo detenta de una serie de prerrogativas jurídicas que se caracterizan por la exclusividad de su ejercicio(5). La jurisdicción, en cambio, resulta por naturaleza fraccionable y, por lo tanto, susceptible de ser compartida, máxime en un sistema federal como el argentino, donde los poderes de regulación y administración pueden encontrarse distribuidos entre la Nación, las provincias y los municipios, a punto tal que en no pocas ocasiones esas distintas órbitas de poder despliegan el ejercicio de sus respectivas facultades sobre las mismas personas o bienes, como sucede cuando existen competencias concurrentes.

Esta percepción de la distinta índole de estas dos fuentes de prerrogativas y potestades (léase, el dominio y la jurisdicción), así como de la eventual disociación que muchas veces existe entre sus respectivos titulares, no nos libra de confundir, en algún caso, ambos planos, como -en mi modesto parecer- ha sucedido en el pronunciamiento que me propongo comentar.

2. Reseña del caso

La demanda instaurada por la Administración de Parques Nacionales ("APN") apuntaba a que se declarase la inconstitucionalidad de dos leyes de la Provincia de Río Negro (las leyes 3978 y 4559) que dispusieron la incorporación al ejido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche de una importante cantidad de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi y a las Reservas Nacionales homónimas.

El planteo de la APN se basaba en considerar que, al sancionar dichas leyes, la Provincia se habría arrogado la facultad de ejercer actos de administración y disposición sobre bienes que, en virtud de lo dispuesto por la ley 22.351, pertenecerían al dominio público del Estado Nacional, amparados, por tanto, por su

condición de inalienables e imprescriptibles. Sostuvo, además, la entidad actora que, por tratarse de tierras comprendidas dentro de los límites de un parque y de dos reservas nacionales, califican como establecimiento de utilidad nacional en los términos del artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional, cuya finalidad es la de preservar las áreas geográficas pertinentes, su flora y su fauna. Ante ello, la actora entendió que la actuación provincial cuestionada no solo habría desconocido el dominio, sino también la jurisdicción que la Nación tiene asignada sobre tales establecimientos.

La ley provincial 3978 dispuso, en su artículo 1º, anexar al ejido municipal de San Carlos de Bariloche el área que se describe en el mapa adjunto a la ley. Entre los fundamentos del proyecto de ley se hizo referencia a la importancia de las actividades comerciales que se desarrollan en la zona, la cual comprende el aeropuerto internacional existente en ese espacio territorial, que al estar exento de fiscalización municipal justificaba (según adujo la Provincia) su integración a los límites de la comuna a fin de aplicar las reglamentaciones, ordenanzas y códigos vigentes en esa jurisdicción local. La ley 4559, a su vez, decidió anexar al territorio municipal otra franja de terreno, comprensiva de la porción del Lago Nahuel Huapi perteneciente al dominio provincial.

Según la interpretación de la Provincia, con ocasión de su creación por ley 14.408 la Nación le habría transferido a su dominio privado las tierras del dominio público estatal comprendidas en el Parque Nacional y en las Reservas Nacionales Nahuel Huapi, dada la falta de reserva para sí de esos mismos bienes (siempre a los ojos de la Provincia) dentro de los tres años previstos al efecto. El artículo 10 de la citada ley, en efecto, preveía el traspaso al dominio de las nuevas provincias de los bienes situados dentro de sus respectivos límites territoriales que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación, “excepto aquellos que necesite destinar a un uso o servicio público nacionales, en cuyo caso la reserva deberá establecerse por Ley de la Nación dentro de los tres años de promulgada la presente”.

La Corte Suprema, en la sentencia que motiva este comentario, recordó que la ley 12.103, que dispuso la creación de la Dirección de Parques Nacionales(6), así como también del Parque Nacional Nahuel Huapi(7), declaró que las tierras de propiedad fiscal existentes dentro del perímetro del parque pasaban a integrar el dominio público(8) con las excepciones previstas en el artículo 22 de la misma ley, entre las que figuraban las tierras “existentes dentro de la colonia agrícola Nahuel Huapi, el pueblo San Carlos de Bariloche y sus ensanches”(9). El mismo texto legal encomendó a la Dirección de Parques Nacionales resolver, dentro del plazo de diez años desde la sanción de la ley, la ubicación y destino de las áreas comprendidas en el referido artículo 22, con la salvedad de que vencido el plazo aludido sin que las tierras hayan sido objeto de resolución especial, ellas quedarán incorporadas al dominio público en los términos del artículo 15 de la ley comentada(10).

El máximo tribunal trajo a colación, asimismo, que la ley 17.830 aclaró que la transferencia de dominio a favor de las provincias creadas por la ley 14.408 no comprendía los bienes pertenecientes al dominio público o privado de la nación que al tiempo de la provincialización de esos territorios estaban afectados a servicios o usos de utilidad o interés nacional(11), lo cual ha venido a confirmar la firme voluntad del legislador nacional de mantener en cabeza del Estado Nacional, entre otras, las tierras que integran el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En su pronunciamiento, el más alto tribunal también hizo referencia al decreto-ley 654/58 (ratificado por ley 14.467), dictado dentro del plazo de tres años previsto por la ley 14.408, por el cual se dispuso que el Parque Nacional Nahuel Huapi continuaría perteneciendo al dominio del Estado Nacional(12). Este antecedente vuelve a ratificar, a juicio de la Corte, la explícita decisión del órgano legislativo de excluir de las tierras transferidas a la novel Provincia de Río Negro aquellas de propiedad de la Nación que integran el mencionado Parque Nacional.

Como último eslabón de esta reseña de normas, la sentencia anotada menciona la ley 22.351, que reitera que “las tierras fiscales existentes en los Parques Nacionales (...) son del dominio público nacional”, y que “también tienen este carácter las comprendidas en las Reservas Nacionales, hasta tanto no sean desafectadas por la autoridad de aplicación”(13). Por si hiciera falta despejar alguna duda al respecto, el mismo texto legal se detuvo a enumerar los parques nacionales y reservas naturales existentes a la fecha, entre los cuales incluyó al Parque Nacional Nahuel Huapi y a las Reservas Nacionales Nahuel Huapi (Zona Centro y Zona Gutiérrez)(14).

A partir de ese estado de situación que no deja lugar a dudas respecto del dominio nacional de las tierras en disputa, la Corte decide hacer lugar a la demanda de la APN sobre la base de un razonamiento tan simple como, a mi juicio, discutible, expresado en estos términos: “(...) corresponde concluir que las tierras consignadas en las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro, en cuanto se encuentran comprendidas dentro de los límites dispuestos por las normas nacionales examinadas y en el territorio de dicha provincia, integraron e integran la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Gutiérrez-, la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Centro- y el Parque Nacional Nahuel Huapi, respectivamente, y han sido excluidas de los bienes que debían transferirse con motivo de la provincialización dispuesta por la ley

14.408, lo que impide a la provincia demandada efectuar actos de disposición con relación a ellos (artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional)” (la *itálica* me pertenece).

3. Condición jurídica de las tierras comprendidas dentro de los límites de los Parques Nacionales y las Reservas Naturales

La jurisprudencia de la Corte Suprema es pacífica, a lo largo del tiempo, en calificar a los parques nacionales como “establecimientos de utilidad nacional”, en los términos del artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional(15). Ello supone reconocer que se trata de enclaves dentro del territorio de las provincias, pero sometidos primordialmente a la jurisdicción de las autoridades nacionales en lo relativo a los fines específicos de cada establecimiento.

La doctrina especializada explica que la presencia de esta incursión nacional en dominios de las provincias se justifica, en razón de las “funciones o atribuciones que hayan sido delegadas al gobierno federal en el texto constitucional y que requieran la ocupación de una determinada porción de suelo provincial”(16).

Es importante dejar a salvo, no obstante, que los establecimientos de utilidad nacional en modo alguno importan la federalización de las áreas que ocupan(17), sino únicamente la transferencia a la Nación de ciertas competencias necesarias, *ratione materiae*, para satisfacer sus fines propios. Bajo esa misma lógica se comprende que, dentro de esas mismas áreas las provincias respectivas conserven ciertos poderes de policía y tributación, que podrán ejercer (según resulta del propio artículo 75, inciso 30, de la Constitución) hasta donde no conspiran con las metas que dieron origen al establecimiento.

Por cuanto concierne a la propiedad de los bienes situados dentro de los límites de los parques y reservas naturales de la Nación, un simple repaso de las leyes sancionadas para regir esos establecimientos basta para comprobar que conviven, en ese ámbito, bienes del dominio público y privado del Estado Nacional(18) con otros de propiedad de los particulares(19). Queda claro, así, que no todas las tierras que integran esos parques y reservas son de titularidad del Estado Nacional, sino que solo integran el dominio público nacional las tierras fiscales existentes dentro de sus límites al tiempo de su creación, en tanto no hubieran sido excluidas expresamente de tal condición(20).

Ahora bien, pese al acierto de estas apreciaciones concernientes al dominio de las tierras que forman parte de los parques y reservas nacionales, es menester apresurarse a advertir que ellas son por completo irrelevantes para la solución del caso que nos ocupa, toda vez que -como enseguida se verá- la ampliación del ejido municipal dispuesto por las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro no incide, en modo alguno, sobre la propiedad de las tierras comprendidas, pues solo tiene consecuencias de cara a los poderes de índole jurisdiccional que tocará ejercer al Municipio dentro de las áreas incorporadas al territorio comunal(21).

4. La creación de la Provincia de Río Negro y sus efectos

En ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional, en el año 1955 el Congreso de la Nación sancionó la ley 14.408, por la cual creó (entre otras) la Provincia de Río Negro(22).

En el marco de ese texto legal, se dispuso transferir “al dominio de las nuevas provincias los bienes situados dentro de sus respectivos límites territoriales que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación, excepto aquellos que [el Estado Nacional] necesite destinar a un uso o servicio público nacionales, en cuyo caso la reserva deberá establecerse por Ley de la Nación dentro de los tres años de promulgada la presente”(23).

La ley citada fue promulgada el 28 de junio del año de su sanción, y dentro del plazo trienal previsto al efecto, por decreto-ley 654/1958 se declaró que “en los términos del artículo 10 de la ley 14.408 continuarán perteneciendo al dominio del Estado Nacional los parques nacionales y monumentos naturales siguientes: (...) d) Parque Nacional Nahuel Huapí, en las provincias de Neuquén y Río Negro, con los límites señalados por la ley 12.103”(24).

Mediante la norma transcrita en el párrafo anterior quedó perfeccionada, en los términos del artículo 10 antedicho, la exclusión del traspaso al dominio provincial de las tierras del dominio público nacional integrantes del parque nacional en cuestión. Pese a no ser necesario, con posterioridad a esa declaración un nuevo acto del legislador nacional vino a ratificar tal decisión(25).

En consecuencia, si bien -cabe reiterar- la titularidad dominial de las tierras carece de toda relevancia a los fines de la resolución del caso, las circunstancias expuestas demuestran que la pertenencia al Estado Nacional de los bienes de su dominio público existentes dentro del Parque y de las Reservas Naturales Nahuel Huapí no se vio alterada por la provincialización de Río Negro, en tanto tales tierras quedaron

excluidas de los bienes del dominio estatal traspasados a la Provincia dentro del territorio que le ha sido asignado por el legislador.

5. Efecto jurídico de la ampliación del ejido municipal

Resta, por último, examinar los efectos jurídicos derivados de la sanción de las leyes 3978 y 4559 que dieron lugar al pleito, por medio de las cuales la Provincia de Río Negro decidió anexar al ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche una franja de tierra comprendida dentro del perímetro del Parque Nacional Nahuel Huapi y de las dos Reservas Nacionales que llevan el mismo nombre.

Está fuera de cuestión que tal extensión de los límites del Municipio no trae consigo la incorporación de las tierras implicadas (sean éstas del dominio estatal o particular) al patrimonio de la mencionada Ciudad. Tal modificación entraña, únicamente, la ampliación del área sobre la cual las autoridades municipales ejercerán sus poderes públicos, esto es, su jurisdicción.

Las leyes provinciales referidas, por tanto, no comportan “actos de disposición” respecto de los bienes (públicos o privados) situados dentro del establecimiento de utilidad nacional parcialmente incorporado al ejido municipal por obra de aquellas, de modo que su constitucionalidad (o no) solo ha de juzgarse a la luz del criterio divisor plasmado en el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional, que limita el alcance de los poderes de policía y tributación locales sobre esos espacios con vistas a evitar toda posible interferencia con el cumplimiento de los fines del establecimiento de utilidad nacional involucrado.

No se trata, en suma, de una controversia que deba dilucidarse en función del dominio de los bienes implicados (cuya titularidad no ha sido alterada ni puesta en entredicho por las leyes provinciales), sino a la luz del reparto de atribuciones que el constituyente ha diseñado para intentar armonizar los intereses públicos federales y locales en juego dentro de estos enclaves nacionales en territorio provincial.

6. Análisis de la decisión adoptada por la Corte Suprema

Como acertadamente lo precisa el dictamen de la Procuración General de la Nación en el caso bajo estudio, la cuestión a resolver por la Corte consistía, en última instancia, en determinar si la Provincia de Río Negro podía válidamente ampliar el ejido municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche sobre tierras que forman parte de un parque nacional y de una reserva natural y que pertenecen al dominio público de la Nación, tal como ocurrió con motivo de la sanción de las leyes 3978 y 4559.

La reseña legislativa prolijamente volcada a la sentencia de la Corte pone en claro que las tierras en cuestión no formaron parte de aquellas transferidas a la Provincia de Río Negro al tiempo de su creación por la ley 14.408. De allí que las parcelas del parque nacional y de las reservas naturales involucradas que pertenecían, por entonces, al dominio público nacional, conservaron esa condición tras la provincialización de los territorios comprendidos dentro de los límites de la provincia mencionada.

El status de establecimientos de utilidad nacional que revisten el Parque Nacional Nahuel Huapi y las Reservas Naturales que llevan el mismo nombre confiere, a su vez, a la órbita federal jurisdicción exclusiva para dictar las leyes y actos que resulten necesarios para alcanzar los fines de conservación propios de esos espacios protegidos, lo cual no impide, sin embargo, a las autoridades locales (provinciales y municipales) ejercer, concomitantemente, “los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines”, tal como lo establece el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional.

La extensión del ejido municipal de San Carlos de Bariloche dispuesta por las leyes provinciales cuestionadas no suponía, por cierto, un acto de apropiación de las tierras abarcadas por la franja incorporada a la Comuna, sino únicamente la sujeción de las personas y bienes en ella existentes a la jurisdicción de las autoridades municipales, en lo pertinente. No se trató, por tanto, como erróneamente lo entendió la Corte, de un acto de disposición o administración sobre esos mismos territorios. Las líneas entre dominio y jurisdicción parecen haberse cruzado inadvertidamente, lo cual llevó al tribunal a tomar una decisión basada en fundamentos debatibles.

El análisis que debió haber presidido la resolución del caso debió enfocarse, en mi opinión, en la regla prevista en el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional. En la medida en que el ejercicio de las atribuciones municipales dentro del Parque y de las Reservas Naturales Nahuel Huapi no significase un obstáculo para los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional respectivos, no había motivos para controvertir la constitucionalidad de las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro, las que ninguna consecuencia proyectaban, como quedó dicho, respecto del dominio nacional de las tierras en cuestión, que se mantuvo inalterado tras la sanción de ambas leyes.

(*) Fallos 347:552, sentencia del 28/5/2024. Derecho Ambiental y Sustentabilidad, Junio 2024 - Número 2, cita digital ED-V-DCLXXXI-436.

(**) Abogado, por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Derecho, por la Universidad de Valladolid (España). Magíster en Derecho Administrativo, por la Universidad Austral (Buenos Aires). Profesor Titular Ordinario de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Director de la Maestría en Derecho Administrativo Económico en la misma Universidad, donde tiene a su cargo las materias Dominio público e infraestructuras e Intervención administrativa en la economía. Dicta habitualmente clases como profesor invitado en la Universidad de Valladolid (España), en la Universidad de Piura (Perú) y en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

Ejerce su actividad profesional en el Estudio "Cassagne - Abogados", como consultor externo.

VOCES: DERECHO ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIÓN NACIONAL - DOMINIO DEL ESTADO - DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO - ESTADO NACIONAL - PROVINCIAS - CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - JURISPRUDENCIA - CONSTITUCIONES PROVINCIALES - PODER LEGISLATIVO - DERECHO POLÍTICO - MUNICIPALIDADES - PARQUES NACIONALES - ACTO ADMINISTRATIVO - DERECHO MUNICIPAL

Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Aspectos legales de las aguas continentales presentes en los parques y reservas nacionales del Sistema Federal de Áreas Protegidas, por Simón I. Cuminetti, ED, 257-793; Los bosques nativos en los parques nacionales y reservas nacionales: aspectos legales, por Simón I. Cuminetti, ED, 264-619; El arte de crear parques nacionales, por Tefesita Iturralde, ED, 267-1060; Distintas concepciones en torno a las nuevas realidades municipales, por María Gabriela Ábalos, EDCO, 2011-32; Usucapión de un bien del dominio público, por Eduardo Buenader, EDA, 2013-691; El Puerto de Buenos Aires: apuntes sobre un establecimiento de utilidad nacional a veinte años de la reforma constitucional, por María Cecilia Recalde, EDCO, 2014-454; Interpretación jurisprudencial de la autonomía municipal, por María Gabriela Ábalos, EDCO, 2013-291; Régimen jurídico de los municipios, por Javier Indalecio Barraza, EDA, 2014-488; Autonomía política de los municipios: límites a las reelecciones a través de ordenanzas locales, por María G. Ábalos, EDCO, 2017-289; El poder de policía ambiental en los establecimientos de utilidad nacional. Potestades nacionales, provinciales y municipales, por Santiago Javier Alonso y Víctor Alejandro Fernández, ED, 268-104; ¿Qué dominio originario? Definir su alcance sigue siendo una asignatura pendiente. Comentario al fallo "Administración de Parques Nacionales c. Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad" de la Corte Suprema, por Ignacio M. de la Riva, Revista de Derecho Administrativo, 2018-469. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderechodigital.com.ar.

(1) Cfr., entre otros, las sentencias recaídas en las causas "Marconetti Boglione y Cía. contra Municipalidad de Santa Fe" (Fallos 304:730) y "Misiones, Provincia de contra Estado Nacional y otro" (Fallos 338:362).

(2) Cfr. los artículos 75, inciso 10, y 124 de la Constitución Nacional.

(3) Cfr. el artículo 124 de la Constitución Nacional.

(4) Cfr. el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

(5) Salvat, Raymundo M., Tratado de derecho civil argentino. Derechos reales, Tomo II, 5ª. Edición, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, 1962, págs. 31-33.

La exclusividad aducida va referida, en rigor, al dominio perfecto, contemplado en el art. 1941 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ese carácter exclusivo aplica también a los condóminos, cada uno de los cuales ejerce con ese alcance las facultades pertinentes sobre la parte indivisa que le corresponde. Distinto es el caso del dominio imperfecto o desmembrado (arts. 1964 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación), que reciben esa denominación, precisamente, por no atenerse a este rasgo esencial del instituto dominical (su carácter exclusivo).

(6) Cfr. el artículo 1º de la ley 12.103.

(7) Cfr. el artículo 21 de la ley 12.103.

(8) Cfr. el artículo 15 de la ley 12.103.

(9) Cfr. el artículo 22, inciso 1º, apartado a), de la ley 12.103.

(10) Cfr. el artículo 23 de la ley 12.103.

(11) Cfr. el artículo 1º de la ley 17.830.

(12) Cfr. el artículo 5º, inciso d), del decreto ley 657/58.

(13) Cfr. el artículo 2º de la ley 22.351.

(14) Cfr. el artículo 32, incisos 3º, 23 y 24, de la ley 22.351.

(15) Cfr. Fallos 327:429; 335:323; 338:362; y 340:991.

(16) Manili, Pablo Luis, Establecimientos de utilidad nacional (Artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional), Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, págs. 18-19.

(17) Mertehikian, Eduardo, "La jurisdicción federal sobre los caminos nacionales (Análisis sobre los límites de las potestades locales)", Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, núm. 238, pág. 13.

(18) Cfr. los artículos 15, 16, 22, 23 y 24 de la ley 12.103; y los artículos 2º, 5º, 11, 12, 13, 20 y 23 de la ley 22.351.

(19) Cfr. los artículos 14 y 26 de la ley 12.103, y los artículos 5º y 10 de la ley 22.351.

(20) Cfr. los artículos 15, 22 y 23 de la ley 12.103; y el artículo 2º de la ley 22.351.

(21) Es menester, en este punto, introducir una aclaración con relación a lo previsto en el inciso 1º, apartado a), del artículo 22 de la ley 12.103, que respecto del Parque Nacional Nahuel Huapi excluía del dominio público nacional al "pueblo San Carlos de Bariloche y sus ensanches". Esta disposición fue derogada en el año 1973 por el artículo 31 de la ley 18.594, de modo que el "ensanche" de la ciudad barilocheña (más precisamente, la extensión de su ejido municipal) resultante de las leyes 3978 y 4559 no podía tomarse en consideración a los fines de la exclusión del dominio público nacional de las franjas incorporadas al municipio según lo previsto en aquella disposición legal, toda vez que a la fecha de sanción de estas dos leyes provinciales aquella disposición legal ya no estaba vigente.

(22) Cfr. el artículo 1º de la ley 14.408.

(23) Cfr. el artículo 10 de la ley 14.408.

(24) Cfr. el artículo 5º del decreto-ley 654/58, dictado el 21 de enero de 1958 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de febrero del mismo año.

(25) Cfr. el artículo 1º de la ley 17.830.

Constitución Nacional:

Inconstitucionalidad: acción declarativa; leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro; anexión de hectáreas a ejido municipal; Reserva y Parque Nacional Nahuel Huapi; ley 22.351; dominio público del Estado Nacional; Administración de Parques Nacionales.

1 - Son inconstitucionales las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro en cuanto anexaron al ejido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche varias hectáreas, toda vez que estas integran la Reserva Nacional Nahuel Huapi -zona Gutiérrez y zona centro- y el Parque Nacional Nahuel Huapi, y han sido excluidas de los bienes que debían transferirse con motivo de la provincialización dispuesta por la ley 14.408, lo que impide a la provincia efectuar actos de disposición con relación a ellos (art. 75, inc. 30, CN).

2 - La acción declarativa deducida constituye la vía idónea para motivar la intervención de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro a las que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto.

3 - Constituye la vía idónea para motivar la intervención de la Corte Suprema de Justicia la acción iniciada a fin que se declare la inconstitucionalidad de normas provinciales que anexaron al ejido municipal varias hectáreas, pues según lo planteado en la demanda tales terrenos se encuentran afectados al régimen de Parques Nacionales de la ley 22.351 y en su mayoría forman parte del dominio público del Estado Nacional, por lo cual la actora -Administración de Parques Nacionales- tiene un interés sustancial y directo en la decisión de la controversia. M.A.R.

CS, mayo 28-2024. - Administración de Parques Nacionales c. Río Negro, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad (CSJ 468/2012 (48-A)/CS1) (*).

(*) Consultar la sentencia completa en Derecho Ambiental y Sustentabilidad, Junio 2024 - Número 2, cita digital ED-V-DCLXXXI-436.

© Copyright: El Derecho
